

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Exp. 05088-31-05-002-2022-00297-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por CONJUNTO SIEMBRA P.H ETAPA II, frente al auto que dio por no contestada la demanda, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por NORA ELENA GUTIÉRREZ MONSALVE en su contra.

ANTECEDENTES:

La demandante puso en marcha este proceso, con el fin de obtener la declaratoria de la existencia de un contrato por prestación de servicios cuya finalización se dio por incumplimiento de la parte contratante que derive en el reconocimiento y pago de los honorarios pendientes de ser causados hasta cuando se cumplía su vigencia.

El Juzgado de Conocimiento que lo es el Segundo Laboral del Circuito de Bello - Antioquia, admitió la demanda por auto del 02 de septiembre de 2022 (Archivo 04) ordenando la notificación a cargo del Despacho, procediendo dicha autoridad judicial con el envío a partir de los criterios al respecto estipulados por el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022 el día 09 de septiembre de 2022 con anexo del link para acceder al expediente digital, del que se advirtió tenía como fecha límite para su apertura el 23 de septiembre de 2022 (Archivo 05).

Ante ausencia de pronunciamiento alguno, el Juzgado por decisión que profirió el 05 de octubre de 2022 dio por no contestada la demanda de parte del CONJUNTO SIEMBRA P.H ETAPA II y fijó fecha de audiencia para desarrollar las etapas de las diligencias incluidas en los artículos 77 y 80 del CPTSS (Archivo 08), y posterior a ello, con data del 11 de octubre de 2022 se remitió por la convocada el escrito de contestación (Archivo 09).

La parte afectada interpuso recurso de apelación ante esa determinación (Archivo 10), señalando que además de remitirse por la parte demandante en dos oportunidades un archivo contentivo del escrito de demanda sin auto admisorio, el despacho procedió con el envío de la notificación el 09 de septiembre de 2022, que solo se evidenció el 27 de septiembre de 2022 en la bandeja de spam o mensajes no deseados, momento en el que la demandada conoció sobre la notificación, cuyo acceso había caducado, por lo que debió contactarse con el Despacho para que fuera nuevamente remitido el expediente, lo que ocurrió ese mismo día en el que debe entenderse se surtió la notificación, por lo que considera que la decisión de dar por no contestada la demanda debe revocarse y se tenga por notificada la demanda desde el 27 de septiembre de 2022.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto atacado se encuentra previsto en el numeral 1° del artículo 65 del CPTSS, según el cual son recurribles a través de la apelación las decisiones de primer nivel que den por no contestada la demanda.

A partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si debe revocarse la determinación de la *a quo* que dio por no contestada la demanda de parte del CONJUNTO SIEMBRA PH. ETAPA II por arribarse el escrito en término acorde a la fecha en que se surtió la notificación.

Pues bien, para definir la cuestión que hoy nos ocupa se tiene que la notificación de la primera providencia que se dicta dentro del proceso ha de hacerse de manera personal, por ende, resultan aplicables a ese propósito los lineamientos de los artículos 41 del CPTSS y 291 y siguientes del CGP, rito que fue modificado temporalmente por el artículo 8° del Decreto 806 de 2020 por los efectos de la contingencia por el COVID-19, el que fue conservado por la Ley 2213 de 2022 en idéntico contenido, cuya aplicación se permitió en los procesos en curso y los que se iniciaran luego de la expedición del Decreto y la Ley a todo tipo de trámites judiciales cualquiera fuera la naturaleza de la actuación, que en lo que importa para la solución de lo debatido, contempla la posibilidad de notificar la admisión de la demanda a través de un mensaje de datos enviado al correo que el promotor bajo juramento indique pertenecer a quien se notificará, con inclusión del escrito de demanda y sus anexos, además del auto admisorio. Se prevé que se entiende notificado el demandado, dos días después del envío del mensaje y que cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del CGP.

Dicho procedimiento fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, condicionando solamente el inciso tercero del artículo 8°, que alude al momento a partir del cual debe entenderse por notificada la demanda, pues como se vio, la norma precisaba que ello ocurría dos días después de enviado el mensaje; sin embargo, para el intérprete autorizado de la Carta, dicho plazo es constitucional si se cuenta desde cuando se da acuse de recibido o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Significa lo dicho que, la prueba sobre el acceso al mensaje de datos avala la contabilización del término referido, más no implica la validez o no de la notificación personal, ya que la jurisprudencia del órgano de cierre ha precisado que *“...la notificación se entiende surtida cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar este proceder implicaría que la notificación quedaría al arbitrio de su receptor, no obstante que la administración de justicia*

o la parte contraria, según sea el caso, habrían cumplido con suficiencia la carga a estos impuesta en el surtimiento del trámite de notificación...” (Ver STC Rad. 11001-02-03-000-2020-01025-00 y STC10417 de 2021).

A partir de lo anterior, el Juzgado asumió esta gestión conforme lo predicó en el auto que admitió la demanda, verificándose acorde a la data de esa providencia que los mails remitidos por la activa los días 11 de julio y 23 de agosto de 2022 (Págs. 14, 18 y 22 Archivo 10), correspondieron a la satisfacción del requisito contenido en el inciso quinto del artículo 6° de la Ley 2213 de 2022 referido al envío simultáneo de la demanda al convocado al momento de su presentación, pero ya para el 09 de septiembre de 2022 fue surtida la gestión con dirección al mail femugaph@gmail.com que la demandada aceptó corresponde a la sociedad administradora de la copropiedad y a través del cual se enteró de la existencia de su radicación desde el 11 de julio de 2022, arrojando el servidor la información de haberse completado la entrega al destinatario (Pág. 2 Archivo 05).

Disiente el extremo demandado en que solo para el 27 de septiembre de 2022 se verificó la bandeja de mensajes no deseados o spam, donde reposaba la aludida notificación por lo que existiendo certeza solo hasta ese momento del recibo del mensaje de datos por la copropiedad para en ese caso promover su defensa dentro de este trámite es desde cuando deben contabilizarse los términos regulados en el ya mencionado artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, ante lo que resulta necesario precisar y reiterar lo que al respecto se adujo en la sentencia C420-2020 en cuanto a que la Rama Judicial cuenta con unas herramientas colaborativas de Microsoft Office 365 que incluye el servicio de confirmación de entrega y lectura de mensajes, por lo que una vez enviado el correo, el servidor de destino responderá inmediata y automáticamente enviando un mensaje informativo al remitente acerca de su recepción, herramienta que a más de comunicar la efectiva entrega del mensaje, cuenta con la útil posibilidad referida a que en los casos en que la dirección del correo sea incorrecta o no exista, el servidor en un periodo máximo de 72 horas, informará sobre la imposibilidad de recepción del correo.

Es cierto que coinciden las Altas Cortes en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante la cual se notifica, sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió efectivamente tal comunicación, encontrando que para asuntos como el que nos ocupa no hay otra demostración de que la notificación ha sido recepcionada con éxito por su destinatario y que hubo un debido enteramiento de la actuación, que con la información de efectiva transmisión que brinda el servidor sin constancia de rechazo o impedimento de ingreso a la bandeja de entrada del receptor a partir de las mencionadas herramientas colaborativas puestas a disposición de los diferentes despachos judiciales, debiendo precisarse que el debido envío sumado a la respuesta automática del servidor indicando la entrega del mensaje de datos, hace presumir que el destinatario lo recibió, lo que deriva en la validez de la notificación sin miras para su aprobación de que se haya dado lectura o se proceda con el acuse de recibido, pues ello representa dejar supeditado el acto de notificación a la voluntad y arbitrio de quien es citado, por lo que si la revisión del correo no deseado solo acaeció el 27 de septiembre, de lo que no se tiene prueba siquiera sumaria para dar razón al dicho de la apelante, no se constituye ello en razón para extender los tiempos que la ley claramente estipula, pues bajo esas condiciones, la notificación se surtió el 13 de septiembre, cuando transcurrieron los dos días desde el envío efectivo a la demandada, fecha desde la que empezaron a correr los diez días que fijó el artículo 74 del CPTSS, que vencieron el 27 de septiembre de 2022, por lo que al arribarse el escrito el 11 de octubre de 2022, es patente que el pronunciamiento se dio de manera extemporánea, resultando en acertada la decisión proferida por el juzgado de conocimiento.

Así las cosas, como quiera que los argumentos con los que se fundamentó la alzada no tienen cabida acorde a las motivaciones expuestas, sin lugar a mayores elucubraciones, se confirmará el auto venido en apelación.


Siguiendo los lineamientos del artículo 365-3 del CGP, se impondrán costas en la segunda instancia a cargo de la demandada. Como agencias en derecho se fija un SMLMV -\$1.000.000-.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

Costas a cargo de la demandada, se fijan como agencias en derecho un SMLMV -\$1.000.000-.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 226 fijados el 15 de diciembre de 2022
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.